Globethics Repository



Cinco tesis sobre el trasfondo del complejo coca/cocaína en Bolivia [Five Theses on the background of the complex coca / cocaine in Bolivia]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Blanes, José;Mansilla, H. C. F.
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-16 17:22:17
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219607

Nueva Sociedad Nro. 142 Marzo - Abril 1996, pp. 65-71

Cinco tesis sobre el trasfondo del complejo coca/cocaína en Bolivia

José Blanes; H. C. F.Mansilla

José Blanes

José Blanes: director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, CEBEM, La Paz

H. C. F. Mansilla: investigador del CEBEM, La Paz.

Resumen:
La posible solución del sistema coca/cocaína está condicionada al abandono de un pensamiento encubridor. La mayoría de la población cree que el problema sólo pertenece a la órbita policial. La falta de estrategias conlleva a la deslegitimación del Estado, a la emergencia de movimientos violentos y extremistas, y a la descomposición de la moral colectiva. Ciertas creencias en torno al problema han adquirido el estatus de verdades indubitables. Mientras tanto, es probable que la producción de coca constituya una actividad subvencionada por el grueso de la población.

1 *Los intentos de solucionar el complejo coca/cocaína están destinados a fracasar a causa de que probablemente todos los actores sociales en juego no pueden, en el fondo, renunciar a una ideología encubridora del asunto; móviles políticos complican la situación hasta hacerla extremadamente enrevesada.*

No han faltado esfuerzos para tratar de paliar la gravedad del problema, como los diversos intentos de un *desarrollo alternativo*[1] para reemplazar los cultivos excedentarios de coca, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna solución pasablemente aceptable para este grave dilema nacional. Desde 1982 los diferentes gobiernos bolivianos han hecho esfuerzos –por lo menos en la teoría– por resolver este conflictivo tema, utilizando terminologías altisonantes y estrategias que pretendían ser originales, pero que en el fondo resultaron ser simples variantes de una misma táctica: la condena retórica –vinculada a ocasionales incursiones violentas que alteran poco la situación global– y la tolerancia fáctica de los cultivos excedentarios de coca.

A pesar de ello, es aún imprescindible hacer serios esfuerzos teóricos y prácticos, por lo menos para comprender mejor y mitigar la gravedad del asunto, que amenaza con entorpecer notoriamente la paz social y hasta desquiciar los

[1] Cf. el instructivo artículo de José Antonio Quiroga: «El desarrollo alternativo como alternativa al desarrollo» en *Nueva Sociedad* Nº 130, 3-4/1994, pp. 144-151.

fundamentos actuales de la sociedad boliviana. Esta en su conjunto no debe (o no debería) permitir que: a) este problema sea tratado exclusivamente dentro de la óptica y los (deleznables) criterios policiales, y b) que los campesinos cocaleros se refugien en una lógica conspirativa y de acciones directas, que pueden ser –y ya son– utilizadas por agrupaciones políticas de extrema izquierda que en las elecciones generales no lograron ningún respaldo popular digno de mención, pero que ahora, en río revuelto, han descubierto la posibilidad de consolidar su menguada legitimidad democrática y de movilizar a sectores poblacionales con fines estrictamente político-partidarios acercándose así, aunque sea muy lentamente, hacia la conquista del poder, objetivo al que nunca renunciaron[2] Ante la actual decadencia de la izquierda se ha desarrollado una burocracia socio-sindical que vive relativamente bien pagada por su asesoramiento y apoyo a institucionales estatales y no-gubernamentales: refugiados en el Parlamento los unos y financiados por la cooperación internacional los otros. Por el lado opuesto no faltan actores socio-políticos que discreta y sigilosamente apuestan por una confrontación –en algunos casos violenta– entre las fuerzas del orden y los campesinos cocaleros, para incrementar de este modo la relevancia, las finanzas y el peso político de los diferentes organismos encargados de combatir el narcotráfico, jugando un importante papel contra un correcto tratamiento del problema. Representan un buen argumento que justifica ideológicamente la fuerte presión de la burocracia militar y policial externa.

2 *La mayoría de la población boliviana supone que la temática coca/cocaína no le atañe directamente y que se trata de un fenómeno claramente delimitado y circunscrito al área policial.*

En general se piensa aún hoy que esta problemática corresponde mayormente a tareas específicas de la policía o de la administración de justicia; asimismo se supone que se trata de un fenómeno originado fuera del país (la demanda masiva de drogas en las sociedades altamente desarrolladas), razón por la que los bolivianos podrían hacer muy poco por resolverlo. Esta actitud, bastante expandida, dificulta la creación y formulación de un consenso nacional viable, realista y de largo plazo acerca de este problema. La falta de conocimientos y, más manifiestamente, la poca inclinación por adquirirlos, junto con la propensión a evitar todo incómodo acto reflexivo sobre esta temática, pueden conducir a una apatía generalizada e, indirectamente, a una suerte de complicidad implícita con el negocio informal-ilícito. No hay duda de que la complejidad de todo el asunto, los muchos actores sociales inmersos en él con motivaciones, conceptos y proyectos políticos dispersos y hasta divergentes, las muchas y contradictorias faces de la economía informal y las muy diferentes imágenes propaladas por la prensa coadyuvan a que la población en general y los actores con poder de decisión se encuentren en un estado que va desde la confusión hasta el cansancio. Los segmentos poblacionales no involucrados parecen adoptar una postura de

[2] Sobre las acciones de estas agrupaciones de extrema izquierda y la propaganda distribuida profusamente en el Chapare, cf. Ricardo Rada Laguna: «Un pequeño aporte para un gran debate» en *Presencia*, 16/9/94, p. 2.

indiferencia ante el sector delictivo-ilícito de la economía informal: ni solidaridad ni repulsión. Como anotó Gustavo Castellanos, «el tema narcotráfico no parece interesar a la población boliviana. ...más bien es un tema secundario dentro de la agenda de sus inquietudes»[3]. De acuerdo a Castellanos, la población tendría una idea ambivalente de los propios narcotraficantes: se los percibiría *positivamente* al suponer que el narcotráfico trae consigo cierto bienestar, como la generación de recursos que permiten estabilidad económica y empleo, y, al mismo tiempo, *negativamente* al identificar el narcotráfico con el mayor agente corrosivo de la sociedad.

Es peligroso, sin embargo, no hacer frente a esta comprensible apatía. Después de todo, el futuro de Bolivia, por lo menos a mediano plazo, está inextricablemente ligado a las consecuencias generadas por el complejo coca/cocaína/narcotráfico, consecuencias que atañen directamente las siguientes áreas: la economía en sentido amplio, el empleo, el ingreso, la capacidad de ahorro, los fenómenos étnico-culturales, el movimiento sindical, la recomposición de las fuerzas políticas, el medio ambiente, las perspectivas de la educación básica y la vocacional, la ética colectiva, el destino de dilatados segmentos poblacionales, las fuerzas armadas y la policía, las relaciones entre ciudadanía y gobierno y, finalmente, la legitimidad del Estado y sus órganos.

3 *La política de no perseguir ninguna estrategia clara a largo plazo (porque todo intento de solución sólo produciría una intensificación de los dilemas) conlleva lamentablemente una serie de posibles efectos negativos, que van desde la deslegitimación del Estado hasta el surgimiento de movimientos políticos violentos y extremistas, pasando por una descomposición de la moral colectiva.*

Desde que el complejo coca/cocaína hizo su aparición en el ámbito boliviano –durante la década de los 70–, no han dejado de acumularse nuevos aspectos y dilemas que no han contribuido a la solución de los anteriores y más bien han complicado el problema hasta niveles casi insolubles. La sedimentación de tantos fenómenos de índole ambigua –para decir lo menos– ha producido en la mayor parte de la población una especie de indiferencia: el narcotráfico y sus elementos concomitantes se han transformado en algo diario, normal y común, que ya no concita una reacción moral adversa. Esta cotidianeidad está, empero, llena de peligros para el futuro de la sociedad:

- La creciente relevancia del complejo coca/cocaína está minando lenta pero seguramente la legitimidad del Estado, de los órganos gubernamenta les, de los códigos y estatutos e, inevitablemente, de toda acción estatal para el llamado desarrollo alternativo de las zonas afectadas.

- La constelación actual puede reducir el umbral de auto-refrenamiento de individuos y grupos con respecto a acciones consideradas todavía como amorales

[3] Gustavo Castellanos: «¿Y el narcotráfico? ...Bien gracias. De radicales creencias a concertados escepticismos» en *La Razón* (suplemento *Ventana*), 10/10/93, p. 16.

o antiéticas. Es decir: puede facilitar la comisión de delitos y favorecer una actitud de lenidad ante los actos delictivos ajenos.

- La situación presente fomenta innumerables fenómenos de corrupción y corruptibilidad prácticamente en todos los niveles de la administración pública y del poder judicial.

- Pautas de comportamiento, vistas generalmente como positivas (el ahorro, la previsión, el interés por el propio futuro, de los hijos y de la tierra, la predisposición a buscar una mejor educación para la generación siguiente, la inclinación a aprender mejores técnicas), tienden a caer en el olvido o a adquirir el carácter de lo superfluo, de aquello que no resulta indispensable en el momento dado.

- Complementario a esta evolución es el fortalecimiento de actitudes inmediatistas, anómicas, oportunistas y éticamente equívocas, lo que vale tanto para el ámbito familiar como para el social y político.

- La constelación creada por todos estos factores favorece a largo plazo el descuido del medio ambiente; las preocupaciones ecologistas y conservacionistas adquieren los rasgos de una ideología foránea, antinacional, reaccionaria y anacrónica[4].

- Este estado de cosas fomenta el surgimiento de movimientos políticos radicales, que se aprovechan de la situación desesperada de los campesinos cocaleros y, especialmente, de su perplejidad frente a los retos del presente. No es una casualidad que a comienzos de febrero de 1994 un militante de un partido de extrema izquierda fuese elegido secretario general de la *Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia* (CSUTCB), quien se proclamó inmediatamente «antineoliberal», propugnando una posición claramente antioficialista y una defensa intransigente de la hoja de coca, denigrando el modelo liberal de economía de mercado y exigiendo «la industrialización y el libre comercio de la coca»[5]. Estos grupos y sectas radicales pueden ganar en importancia si la confrontación entre el gobierno y los campesinos cocaleros gana en intensidad y si no se establecen acuerdos duraderos basados en fundamentos realistas. En el futuro el dirigente cocalero Evo Morales, además de ser postulado al premio Nobel de la Paz, puede estar sentado en el Parlamento, complicando mucho más el problema.

- Finalmente, si no se modifica la situación actual, es probable que extensos sectores campesinos del país (y una parte de los urbanos) se dejen seducir por la ideología propalada por estas corrientes extremistas, que atribuyen a la coca las funciones de resistencia sociopolítica, afirmación cultural y lucha antimperialista, además de una tradición «semi-sagrada». Se puede afirmar que esta estrategia ha tenido ya algunos éxitos: las connotaciones emocionales asociadas a este

[4] Cf., por ej., Fernando Untoja: «Ecología: ¿una ideología?» en *Presencia*, 21/9/91.
[5] «Militante 'a tiempo completo' del Eje Pachacuti llegó a la CSUTCB» en *Presencia*, 3/2/94, p. 1.

«sagrado recurso» se han arraigado en el imaginario popular, en las doctrinas del movimiento sindical, en una porción de la prensa y hasta en la arena política y pueden ahondar las divisiones étnico-culturales existentes dentro de la población boliviana. Las posibilidades, empero, de una revisión crítica de esta visión ideológica son todavía muy remotas y hasta se pueden debilitar en forma sustantiva.

4 *Algunas convicciones en torno al complejo coca/cocaína (por ejemplo acerca de la pobreza campesina que motivaría la mera existencia de la economía cocalera) han adquirido entretanto la calidad de verdades indubitables, reforzadas en cuanto tales por la acción de los intelectuales progresistas.*

Para comenzar es imprescindible, como afirmó Gonzalo Flores, reconocer algunos hechos desagradables para la opinión pública boliviana, incluyendo sus segmentos «progresistas»: muchos campesinos se han convertido en productores de pasta básica de cocaína; la ley 1008 no sirve para los fines para los cuales fue diseñada; siempre surgen nuevos narcotraficantes; el desarrollo alternativo no funciona y la sociedad boliviana quedará crecientemente «penetrada» por la cultura autoritaria del narcotráfico, cuyo corolario es la pérdida de legitimidad del sistema democrático en general[6].

Es importante señalar que este tipo de enfoque crítico no es usual en la escena intelectual y periodística boliviana, la cual prefiere manifiestamente apoyar *a priori* una ideología pro-campesina y antinorteamericana que por sus distorsiones impide una visión desapasionada de la problemática. Uno de los lugares comunes de esta ideología es minimizar las consecuencias económico-financieras del tráfico ilícito de drogas en la esfera de los productores de la hoja de coca, afirmando que tal actividad habría creado fabulosos imperios monetarios de la noche a la mañana, pero que en Bolivia sólo habría dejado «un rastro de miseria e inseguridad entre los campesinos»[7]. Los esfuerzos norteamericanos para contener el narcotráfico son percibidos como una «guerra» contra la inofensiva hoja de coca y como una militarización de todas las actividades económicas en las zonas de la coca excedentaria: Bolivia se habría transformado «en el teatro de ensayo de unas políticas de 'reducción de la oferta de drogas' diseñadas en su mayoría fuera del país»[8]. Los cocaleros bolivianos serían las víctimas de las dictaduras militares desde hace veinte años, lo que habría conducido desde entonces a la militarización de las relaciones entre el Estado y los campesinos[9].

Una breve acotación es indispensable en torno al tema de la pobreza en cuanto factor motivante de la dedicación al cultivo de la coca (y eventualmente de la

---

[6] Gonzalo Flores: «Narcotráfico en Bolivia: Cinco verdades y una pregunta» en *La Razón* (supl. *Ventana*), 2/10/92, p. 18.
[7] J.A. Quiroga: ob. cit. p. 145.
[8] Ibíd., p. 146, 149.
[9] Jaime Malamud Goti: «Los militares y la guerra contra las drogas» en *Nueva Sociedad* Nº 130, 3-4/1994, p. 183; este artículo es una muestra de la total incompresión de la problemática, apareada a una base empírica y documental impresionantemente exigua.

elaboración de la pasta base de cocaína). Aunque no hay ni estudios sociológicos basados en experiencias empíricas ni datos estadísticos concluyentes acerca de la composición interna de la población del Chapare –con la excepción de algunos estudios de José Blanes y Gonzalo Flores[10]–, de su origen geográfico y ocupacional (dato esencial para establecer si se trata efectivamente de migraciones masivas y permanentes) y, sobre todo, de sus vínculos con posibles zonas de expulsión demográfica, se puede colegir de la masa de información dispersa que:

a) Una buena parte de la población contemporánea del Chapare no proviene de las regiones rurales más pobres del país (por ejemplo los bolsones de extrema pobreza agraria de Oruro, Chuquisaca, Potosí y Tarija), sino de parajes aledaños al Chapare, donde los actuales cultivadores de coca conservan sus parcelas de tierras altas, utilizándolas para sembrar los productos tradicionales de altura. Se trata, por lo menos parcialmente, de un sistema de *economía complementaria* basado desde tiempos inmemoriales en el uso de los diversos pisos ecológicos de la macrorregión, sistema magnificado en el presente por las espléndidas oportunidades de mayores ganancias que brindan las cosechas de la sagrada planta.

b) Es probable que la causa primordial –dentro de un tejido de motivos que siempre se da al tomar decisiones existenciales tan importantes– para migrar al Chapare y dedicarse al cultivo de la coca no haya sido la extrema pobreza, sino el legítimo anhelo de ingresos más altos cuando los que se tenían anteriormente no eran nada razonables. Es decir: no han emigrado al Chapare los más pobres de los pobres, sino la capa poblacional situada por encima de ellos (en lo referente a ingresos y acceso a la información).

c) A pesar de los innegables signos de pobreza y subdesarrollo que pueden ser constatados diariamente en el Chapare, hay que reconocer que, por otro lado, esta región ha experimentado un notable progreso medible en términos de infraestructura caminera, electricidad y agua potable, de comunicaciones, de abastecimiento con los más variados objetos de consumo masivo, en construcción de postas sanitarias, escuelas y lugares de esparcimiento público y también según los indicadores habituales de la modernidad material: alta densidad de tráfico, elevado número de operaciones enteramente lícitas –de banco y crédito per capita de la población, propiedad de medios automotores de locomoción y otros. El ingreso anual promedio per capita en las zonas rurales realmente pobres de Bolivia (es decir: en los bolsones de pobreza crítica de Potosí, Oruro y Chuquisaca) fluctúa entre los 120 y 150 dólares, mientras que en el Chapare es probablemente de ocho a diez veces mayor.

[10] José Blanes: *De los valles al Chapare. Estrategias familiares en un contexto de cambios*, CERES, Cochabamba, 1983; Gonzalo Flores / José Blanes: *¿A dónde va el Chapare?*, CERES, Cochabamba, 1983.

Aunque sea duro decirlo, parece que los campesinos cocaleros del Chapare han desplegado un curioso virtuosismo en extorsionar al Estado boliviano, a cientos de ingenuas organizaciones no gubernamentales y hasta a los grandes organismos internacionales para recibir montos nada desdeñables de ayuda no reembolsable y toda clase de cooperación en proyectos de desarrollo –con el argumento-amenaza de dilatar los cultivos de coca–. Es claro que una parte sustancial de esos montos se ha quedado en las redes internas de la frondosa y parasitaria burocracia que administra esas instituciones públicas y privadas o simplemente se ha evaporado para alegría de la misma, pero también es evidente que a lo largo de los años una porción considerable de esos fondos ha servido para la implementación de los más diferentes proyectos de desarrollo y así para elevar el nivel de vida de los habitantes del Chapare.

Finalmente se puede afirmar que una porción predominante de la opinión pública, influida por los llamados intelectuales progresistas, prefiere evitar toda reflexión crítica en torno a estos *aspectos incómodos* del complejo coca/cocaína. Es probable, sin embargo, que la opinión pública boliviana persista mayoritariamente en atribuir el papel de víctimas a los campesinos cocaleros y el rol de los victimarios al imperialismo norteamericano y a los narcotraficantes.

Apelando a la compasión de grupos sociales mal o sólo parcialmente informados, algunos intelectuales, los sindicatos y los pocos partidos de izquierdas que quedan aún en el país han logrado hacer prevalecer una visión distorsionada del complejo coca/cocaína, una visión que ha adquirido entretanto el carácter de una verdad indubitable. De acuerdo a esta última, el cultivo de coca tiene poco que ver con la elaboración de la cocaína y representa más bien la primera etapa elemental de una tradición milenaria, que está integrada en los rituales contemporáneos de la población indígena de Bolivia y que conforma un elemento identificatorio básico de amplios estratos sociales provenientes de las etnias originarias de la región.

Para una parte considerable de la opinión pública los campesinos cocaleros se han convertido en el sujeto revolucionario por excelencia y encarnan ahora la misión histórica de ser los agentes de la transformación radical del país según los conceptos de un milenarismo que conjuga, de forma bastante artificiosa y cómica, elementos marxistas, indigenistas y nacionalistas.

5 *Es probable que la producción de coca constituya una actividad subvencionada por el grueso de la población.*

Aunque no existan testimonios documentales y concluyentes datos empíricos, se puede aseverar provisionalmente que entretanto el cultivo de coca –y singularmente el excedentario en el Chapare es subvencionado hasta cierto punto por el Estado boliviano– por ende, por toda la colectividad del país –y por las agencias de cooperación internacionales. En los últimos años se invirtieron 500 millones de dólares para erradicar la coca excedentaria y de esos cultivos sólo se erradicaron efectivamente 3.000 hectáreas. La «administración» de los programas

habría consumido 100 millones[11]. Aun así por hectárea de coca se habrían invertido nada menos que 166.000 dólares, que en ninguna parte del mundo es poco por hectárea de cultivo de cualquier producto vegetal. Descontando los fondos desaparecidos y evaporados para otros y muy comprensibles fines profanos, lo que probablemente ha quedado en el Chapare para obras de utilidad comunal, para infraestructura de todo tipo y finalmente como dineros de libre disponibilidad (por ejemplo para las cúpulas dirigentes de sindicatos, cooperativas y otras organizaciones representativas de los cocaleros) es una suma respetable en cualquier paraje de este planeta.

Aunque paradójico, es constatable el hecho de que estas «modernas» formas de subvención gubernamental se inscriben plenamente en la antigua tradición del asistencialismo estatal, que en el área andina puede ser rastreado hasta las épocas precolombinas. La falta y hasta la penalización de iniciativas individuales han tenido durante larguísimo tiempo su correlato en la acción previsora de los órganos estatales, a quienes se acudía en todos los casos de problemas sociales y carencias materiales; era y ha sido habitual el acogerse al auxilio del Estado altamente centralizado –instancia temida y encomiada simultáneamente– tanto en casos de dilemas organizativos internos como en la eventualidad de catástrofes naturales. A pesar de toda su acerba crítica al «Estado imperialista, explotador y clasista», los campesinos cocaleros no dudan en preservar este legado de paternalismo, exigiendo y recibiendo toda forma de ayuda pecunaria y de otro tipo que les llega desde el padre-Estado, y tampoco vacilan en demandar imperiosamente de las instituciones estatales toda colaboración en caso de desastres naturales y para la edificación de una infraestructura moderna.

[11] «Urge replantear el desarrollo alternativo: por hectárea de coca se invirtió $US 166.000» en *Presencia*, 28/9/94 [declaraciones del ministro de Gobierno Germán Quiroga].